

Informe de Coyuntura

Nº 3 - 2010

Buenos Aires, diciembre de 2010

rls
rosa luxemburg stiftung

FISYP
Fundación de Investigaciones Sociales y Políticas



Índice

<i>1. Algunos apuntes y reflexiones sobre el contexto internacional</i>	5
<i>2. Argentina: entre el crecimiento y la crisis mundial</i>	7
<i>3. Sobre la Cumbre iberoamericana, crisis y alternativas.</i>	11
<i>4.- Cambios en el escenario político. La muerte de Néstor Kirchner. La política económica.</i>	13
<i>5. Sobre algunos aspectos de la política. La disputa de la hegemonía.</i>	19
<i>6. Inflación y pobreza.</i>	21
<i>7. Algunas conclusiones.</i>	23



1. Algunos apuntes y reflexiones sobre el contexto internacional

La economía estadounidense y europea continúa dando muestras de continuidad de la crisis, con un crecimiento muy importante de la desigualdad. En la región latinoamericana, según la CEPAL, los impactos macroeconómicos de la crisis mundial fueron menores que en los países capitalistas desarrollados, sin embargo, existe un incremento absoluto de la desigualdad.

Lo que pretendemos señalar es que más allá de la crisis, lo que crece en el mundo es la desigualdad. Por eso, sin perjuicio de la pérdida de dinamismo de las potencias hegemónicas del capitalismo mundial, EEUU, Europa o Japón; y de la nueva potencialidad emergente de Brasil, Rusia, India o la China, los países llamados BRIC, lo que debe considerarse es la movilidad transnacional del capital para asegurar y viabilizar el proceso de valorización del capital. Importa la liberalización y la valorización transnacional.

En la reunión del G20 parecen confirmarse estas modificaciones en las cuotas nacionales de poder mundial, donde lo esencial continúa siendo la dinámica de los capitales por asegurar la liberalización de la economía, el libre movimiento de los capitales según manda el mercado mundial.

EEUU no pudo imponer regulaciones comerciales o monetarias para favorecer su situación y China aceptó vagos calendarios para adecuar su política nacional a las demandas de otros grandes actores de la economía mundial. ¿Es acaso un empate entre el viejo y el nuevo liderazgo? O mejor debe interpretarse como parte de una negociación política que permite avanzar en los objetivos liberalizadores propuestos por las transnacionales.

Por otro lado, es un hecho constatado en las elecciones realizadas en Estados Unidos de noviembre de 2010, que se frustraron las expectativas que pudieran haberse gestado respecto a Obama, y que esa frustración (ambigua y desorientada) fue a engrosar la derecha más recalcitrante y cavernícola, lo que además muestra el bajo nivel de politización y de participación de los ciudadanos de ese país. Agreguemos que sobre el fin del año su administración bajó los impuestos personales beneficiando así, a los sectores de mayores ingresos, en el contexto de un momento de agudo desempleo y pobreza en la potencia mundial.

El gobierno de EEUU ha demostrado que asume el proyecto de la derecha y las clases dominantes, y que piensa, más en la renovación presidencial hacia el 2012, que en los problemas que aquejan a su país.

En Europa la situación es similar, la propia "izquierda socialdemócrata" en los gobiernos de Grecia y España da el visto bueno para el desarme final de lo que resta del "Estado de bienestar". Debe consignarse que si en algún lugar se concentra la ofensiva del capital es en el viejo continente, donde la histórica fortaleza de la clase obrera y en su momento la cercanía de la opción revolucionaria que implicó la revolución rusa y el proyecto de "socialismo soviético", determinaron que el occidente capitalista se viera forzado a aplicar la política del *welfare state*.

La reestructuración europea, en curso, con las reformas reaccionarias en el régimen previsional, o en las relaciones entre el capital y el trabajo, son parte de la disputa política por la hegemonía del régimen. Curiosamente la socialdemocracia, donde aun es gobierno, asume también, un papel preponderante en la regresiva reestructuración de las relaciones sociales. Asumen así, el programa del gran capital para disputar el gobierno a la derecha.

Tanto en Europa como en EEUU está en juego la hegemonía en la administración del régimen capitalista. La construcción de alternativa aparece muy alejada de la agenda y la práctica de las clases subalternas y se asocia a las reminiscencias de un proyecto exitoso durante décadas y que fuera derrotado en el fracaso del comunismo en el este europeo y sus correlatos en el continente, tanto como el transformismo de la socialdemocracia a la tercera vía.

La crisis capitalista habilita la discusión por la hegemonía en la gestión del sistema capitalista, al interior de los principales centros de acumulación (EEUU y Europa), como en la dominación a escala global. La hegemonía del orden capitalista se sustancia en las guerras comerciales, monetarias, tanto como en el plano de las ideas, de las corrientes que disputan el sentido de las ideas (pos neoliberalismo, neo keynesianismo, neo desarrollismo, etc.) y por supuesto en el plano de la fuerza militar.

2. Argentina: entre el crecimiento y la crisis mundial

Es muy curioso cómo el gobierno argentino insiste en el carácter externo de la crisis. ¡Hasta se llegó a postular que EEUU necesitaba un plan B, similar a la política económica de la Argentina para superar sus problemas ante la evidencia de la crisis!

Tanto Bill Clinton, como Paul Krugman, ambos en conferencias realizadas en Argentina, pusieron de manifiesto las enseñanzas de la gestión anti crisis local para el ejecutivo estadounidense. Son manifestaciones que avalan como "adecuadas" las tareas de salida de la crisis (2001) realizada en Argentina y consideran que es un modelo a imitar para los países que asumen transitoriamente la crisis en la actualidad, no solo EEUU.

Mucho se comparó la crisis griega o irlandesa con la argentina, sugiriendo la devaluación (ídem Argentina 2002) como forma de recuperar competitividad mundial respecto a las producciones nacionales de esos países en crisis. La comparación igualaba la relación del peso con el dólar y la subordinación al euro de las economías europeas.

La pregunta a formular, es ¿cuál es el ejemplo? ¿De qué es ejemplo Argentina? La respuesta remite a la efectividad para salir de la crisis recesiva entre 1998 y 2002 y recuperar el crecimiento desde 2003, sólo frenado durante el 2009. En el 2010 se recupera el ritmo de 9% acumulativo por año durante el periodo. Se toma como que el mero crecimiento fuera signo de salida de la crisis, y que al mismo tiempo la recesión es crisis. No es así, tanto crecimiento, desaceleración como recesión esconden beneficiarios y perjudicados. Ambos pares de una ecuación que consolida la desigualdad del capitalismo contemporáneo, en Argentina, la región latinoamericana y el mundo.

Lo cierto es que más allá de los datos positivos de la macroeconomía, lo que surge es la consolidación de la extranjerización de la estructura económica, en un cuadro de desigualdad social y un modelo productivo que destruye nuestros recursos naturales, los bienes comunes del país.

El crecimiento argentino de estos años está asociado a la demanda externa, de un mundo en crisis. La crisis es mundial y ese mundo es el que demanda la producción local.

Argentina es gran productora y exportadora de soja y derivados y, sin embargo, los precios son fijados en el mercado mundial. Son precios en ascenso en el último tiempo, que aún en la oscilación a la baja en el 2009 están asociados a un movimiento especulativo con materias primas. El oro es mercancía de resguardo en momentos de crisis y su precio evoluciona al alza sin límite.

Argentina sin ser un país minero está recibiendo cuantiosas inversiones externas en mega minería a cielo abierto. Lo que antes no era rentable ahora lo es, no se tiene en consideración, no importa que ello demande remover (o destruir) glaciares, malgastar millones de toneladas de agua dulce o incluir cuantiosas cantidades de tóxicos en el suelo y subsuelo de las zonas mineras, provocando enfermedades irreversibles a los habitantes de esas regiones, condenando a los niños a la muerte prematura por cáncer¹.

1. Después del veto presidencial a una ley de protección de los glaciares, el diputado Bonasso presentó un nuevo proyecto acompañado por la izquierda parlamentaria y que obtuvo mayoría en ambas cámaras. Esta votación fue significativa no sólo por la importancia del tema y el papel de los movimientos sociales en oponerse a la explotación de la zona de glaciares y a la minería a cielo abierto específicamente, sino porque es un dato a tener en cuenta los apoyos que cosechó en parte del propio bloque oficialista. No obstante los gobernadores de las provincias (notoriamente el gobernador de la provincia de San Juan), donde reside la explotación minera que causa graves daños a los glaciares (entre otras cosas) ya han manifestado que no se sienten obligados por esta ley dado que ella es nacional y los recursos provinciales!

La producción de soja supone no solo la subordinación comercial al mercado mundial, sino que la propia producción está sujeta al paquete tecnológico que manejan las transnacionales de la biogenética y la alimentación, en la provisión de agroquímicos, fertilizantes o semillas (que contaminan el suelo y lo vuelven inepto para otros cultivos), haciendo dependiente el ciclo productivo de la dominación del capital concentrado transnacional. Es un crecimiento de la economía argentina dirigido por el comando del capital transnacional.

Los precios de las commodities están en alza asociados a la crisis alimentaria, energética y medioambiental. Son materia de la especulación con colocaciones de producción a futuro en un mercado financiero que estabiliza una tendencia a la timba global con materias primas.

Pero no solo se trata de producción primaria, ya que algo similar ocurre con el crecimiento industrial. Veamos en particular la impresionante evolución de la industria automotriz, con récord de producción y ventas de automotores. La producción cercana a 700.000 unidades confirma que un 75% aproximadamente se destina al mercado mundial y que más del 60% de las compras locales son unidades producidas en el exterior.

Muy distinto ocurría en el capitalismo de fines de los 50 hasta los 70, donde lo principal de la producción de automotores se destinaba al mercado interno, sobre la base de ganancias y salarios con condiciones de pleno empleo o escasos niveles de desempleo y precariedad, tal como ocurre en la actualidad.

En el periodo previo, junto al desarrollo de las terminales automotrices se desarrollaba una importante industria de autopartes, siendo limitadísima la contribución actual de los autopartistas a una industria que es cada vez más de armado.

Un ejemplo paradigmático de lo dicho lo representa el caso de la empresa Paraná Metal, la más grande autopartista, que venía produciendo blocks para la Ford Brasil. Ante la pérdida del mercado se presentó la situación que de 900 trabajadores, 700 quedaban afuera de los planes de producción sustentados por la patronal.

En rigor, la producción primaria en las condiciones de sojización y aliento a la minería, como la industria automotriz, pilares del crecimiento productivo argentino de estos tiempos, no son grandes creadores de empleo y por lo tanto el crecimiento que generan no está asociado a la resolución de un problema central de la economía argentina tal como los problemas del empleo.

No solo no se genera empleo suficiente, sino que se expulsa población, caso de la soja, además de destruir el suelo y las condiciones productivas para otras producciones, principalmente aquellas asociadas a la producción resultante de la agricultura familiar.

El crecimiento de la economía argentina generó las condiciones para el restablecimiento de la ganancia y la disputa por la administración del sistema capitalista. Lejos de la recesión motora de la crisis del 2001, distintas fracciones de la clase dominante discuten la hegemonía del gobierno del régimen del capital en el país. Al mismo tiempo se discute el tipo de inserción internacional del capitalismo local en la división internacional del trabajo.

El 2008 y el 2009 fueron momentos de debates y disputa por la hegemonía del capitalismo local. Lo que se puso en discusión, una vez "normalizado" el régimen del capital, es quién administra y gana el consenso de la sociedad para la gestión capitalista.

La respuesta gubernamental a la crisis generada desde la "Mesa de enlace" (conformada en 2008 cuando el conflicto por las retenciones a productos agrícolas) empieza a visibilizarse en el último tiempo, con el retorno de los principales referentes de la Federación Agraria Argentina, al consenso con las políticas oficiales (o por lo menos con el juego constante, de retorno y retirada). Se asocia a los cambios en relación con la política agraria, especialmente en cuanto a atender las demandas de los sectores pequeños y medianos que se asociaron a los grandes terratenientes y productores y ex-

portadores agrarios en tiempos del conflicto. Todo lo cual no impide que el conflicto salga de letargo, se active con nuevos reclamos, vuelva a calmarse.

No solo se modificó el dialogo (segmentado) con las patronales agrarias, sino que se satisfizo la demanda de los grandes productores y exportadores. El tipo de cambio alcanzó sobre fines del 2010 los 4 pesos por dólar, favorecido por la tendencia devaluatoria del dólar respecto de otras divisas, especialmente el euro. Con el peso asociado al dólar, las devaluaciones de la moneda estadounidense reemplazaron la devaluación de la moneda nacional en Argentina. El reclamo devaluacionista de los grandes productores y exportadores se aminoró ante la realidad de adecuación de la paridad de la moneda con la divisa estadounidense en condiciones de la crisis mundial.

El restablecimiento del funcionamiento del FMI ha sido el principal resultado de los acuerdos del G20 y por eso Argentina inició el tratamiento de los tres problemas que la mantenían alejada del sistema financiero mundial. Uno es la reapertura del canje de la deuda, que había sido cerrado por ley en 2005 y que en 2010, con acuerdo de la oposición sistémica y el oficialismo se reabrió transitoriamente para que los inversores participaran en el canje de deuda, situación que compromete recursos fiscales durante los próximos años en el pago de la deuda pública pasando por sobre las necesidades internas.

La cuestión se asocia al inicio de las negociaciones con el Club de París para cancelar la deuda impaga por casi 7.000 millones de dólares y el comienzo de la normalización de las relaciones con el FMI al invitarlo a ser parte de una consultoría relativa al armado de los indicadores de precios (muy cuestionados actualmente en cuanto a su veracidad) en el INDEC.

Entre el canje, el club de París y el arreglo con el FMI se va cerrando el círculo de la política gubernamental en torno de la deuda externa pública y la finalización de la cesación de pagos declarada a fines del 2001. El objetivo apunta a reinsertar al país en el mercado internacional de préstamos.

Un interrogante es si la Argentina necesita hoy del financiamiento externo. Es una pregunta pertinente que surge de pensar las consecuencias históricas del endeudamiento, aún con tasas internacionales tan bajas, similares a las que generaron el gran endeudamiento de los años 70' y que derivara en el problema del endeudamiento que condicionó a cada turno constitucional desde 1983, incluido el presente periodo gestionado por Cristina Fernández.

Existen importantes reservas internacionales y saldos favorables en el comercio internacional y las cuentas fiscales. El horizonte es de crecimiento económico para el presente y próximo año, pero aún así, los inversores internacionales condicionan el ingreso de sus capitales al país, si se normaliza la situación con el sistema financiero internacional. Así, regularizar los pagos, no es solo una demanda de los acreedores, sino también de los capitales excedentarios que buscan rentabilidad rápida en un marco de continuidad de la crisis mundial con epicentro en el centro capitalista. Por ello es que las novedades vienen en estas horas por la renovación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional. La motivación es el INDEC, o quizá, el abordaje sobre uno de los principales problemas económicos de nuestro tiempo en el país: la inflación. Lo concreto es la contribución profesional del Fondo en la elaboración de un índice de precios, en el mismo momento que se difunde la crítica evaluación universitaria a la información estadística oficial. Una opinión ofrecida por la academia argentina sobre la consulta realizada por el Ministerio de Economía. Vale preguntarse por qué no se derivó en técnicos y profesionales locales, con aval en prestigiosas universidades públicas, la tarea que se le confía ahora al FMI.

La respuesta puede encontrarse en la tríada articulada entre el canje de la deuda, las negociaciones con el Club de París y la reinsertión del Fondo en el país. Bien puede sostenerse que la esencia del problema se explica producto de una política coherente con la participación argentina en el G20 y que demanda resolver el default y normalizar el vínculo local con el mercado financiero mundial, donde el organismo internacional cumple un papel destacado, especialmente asignado para atender la crisis por parte de los presidentes del G20.

Se puede argumentar que el país cerró el ciclo económico de la crisis recesiva de 1998 a 2002, con un crecimiento desde el 2003, que se ratifica en el presente año y convalidado conceptualmente, nada menos que por Paul Krugman, el Premio Nobel de Economía del 2008. La asignatura pendiente, se entiende, es que esa evaluación sea realizada por el sistema mundial, en momentos de recrudescimiento de una crisis global que no termina de esfumarse, y al contrario, reaparece en diferentes territorios, ahora Irlanda.

La idea de la "normalización" del orden capitalista fue un propósito explícito del mensaje presidencial inaugural en la era Kirchner en mayo del 2003, razón por lo cual se sostenía que no se trataba de un gobierno del default, que la búsqueda apuntaba a reinsertar al país en la economía mundial y que para ello había que superar la situación de cesación de pagos.

Lo curioso es que el conflicto con el FMI se explicita en el mismo momento que empieza a perfilarse una disparada de los precios. En efecto, el pago anticipado al Fondo por 9.500 millones de dólares ocurre inmediatamente luego del canje de deuda del 2005 y el reemplazo de Roberto Lavagna en el Ministerio de Economía para abordar la nueva etapa que empezaba a mostrar el rebrote inflacionario. Allí se inició una política de acuerdos de precios con empresarios, con el objeto de controlar y frenar las subas y que a tiempo vista se muestra limitada.

Debe sumarse al análisis la creciente normalización de negociaciones salariales, como parte de una puja social en la distribución del ingreso. Claro que afuera de esos acuerdos queda el sector informal o no regularizado que expresan los tercerizados y flexibilizados en el mercado laboral. Ahora se intenta nuevamente remedar un pacto social, entre trabajadores y empresarios mediados por el poder ejecutivo. Para los empresarios el problema pasa por las demandas de aumento salarial y para los trabajadores el tema central es la carestía de la reproducción de la vida cotidiana.

Por eso, más allá de la cuestión técnica que supone la presencia del FMI en la elaboración de un nuevo índice de medición inflacionaria, lo determinante es el crecimiento de los precios, especialmente de la canasta alimentaria, conjunto de bienes que afectan a los sectores de menores ingresos, entre ellos, los beneficiarios de las principales políticas sociales compensatorias, como la asignación universal por hijo.

En la estrategia gubernamental se reconoce la necesidad de asociar la normalización de relaciones con el FMI a las asignaturas pendientes que suponen la deuda y la inflación.

La realidad de las relaciones exteriores del gobierno argentino oscila entre la participación en el G20, el restablecimiento del papel del FMI en escala global, y claro que también en Argentina: el aliento a negociaciones por el libre comercio; y el aliento a relaciones fraternas entre los países de la región y el sur del mundo. El interrogante es cuál de estas dos acciones es la que adquiere hegemonía en la política exterior.

3. Sobre la Cumbre iberoamericana, crisis y alternativas.

La realización de la cumbre iberoamericana en Mar del Plata nos permite pasar revista a la situación de los países involucrados y analizar las diferentes posibilidades que se presentan para el desarrollo.

Por un lado tenemos a los miembros de la península ibérica, no solo atravesando una profunda crisis, sino en el preciso tiempo de un violento ajuste que sufren los trabajadores y sectores populares, los más vulnerables al momento de describir el impacto de la crisis. Tanto España como Portugal están identificados como próximo destino de una crisis que en Europa transitó el camino del ajuste en el "este" (ex países socialistas), en Grecia e Irlanda; como contra parte de una crisis de la banca francesa y alemana, los acreedores de una cuantiosa deuda pública que intenta superar la crisis fiscal de los Estados de la vieja Europa.

La etapa europea es la del desmantelamiento de lo que queda del Estado del Bienestar. Ahora se conoce en carne propia la situación de malestar que hace años transita el sur del mundo. Esa crisis europea y su ajuste explican el discurso de los gobernantes de la península ibérica a favor de la liberalización de la economía y especialmente de la suscripción del acuerdo de libre comercio entre Europa y América Latina, especialmente con los países del Mercosur. Es que las empresas españolas (y otras europeas) han invadido con sus inversiones el mercado regional y desde estos territorios surgen ganancias que equilibran las dificultades de esas mismas empresas con explotaciones en territorio europeo. Las ganancias producidas en Latinoamérica los empujan a demandar de la región nuevos resguardos a la "seguridad jurídica" de esas empresas y por eso buscan avanzar en tratados de libre comercio.

Por otro lado, la situación de la región latinoamericana es distinta a la europea, especialmente cuando se miran las cuentas macroeconómicas, que hace sugerir a algunos la lejanía de la crisis mundial. Son los que omiten el carácter transnacional del poder económico en la región y por eso, junto a los datos del crecimiento económico es necesario identificar a los beneficiarios de esa evolución económica, tanto como a la mayoría popular perjudicada.

Así se puede verificar que junto a la continuidad de las fabulosas ganancias de los sectores más concentrados de la economía regional, mayoritariamente asociados al carácter primario exportador que asumió el modelo de desarrollo en nuestros países, se convive con una realidad de insuficiencias donde la cruda realidad de Haití devuelve la cara más cruel del atraso y la miseria regional. Puede constatar que Haití es proporcionalmente uno de los países de mayor emigración de profesionales, precisamente cuando la catástrofe local demanda de médicos y otros profesionales para atender imperiosas necesidades humanitarias.

La región exporta recursos naturales y potencialidad humana, verificando la subsunción del trabajo, la naturaleza y la sociedad en el capital. Pero curiosamente, desde la pobreza e indigencia regional surgen algunas decisiones que sirven para pensar en términos alternativos.

Cuando desde los organismos internacionales se pregonan e impulsan modificaciones regresivas de los sistemas previsionales, desde Bolivia se asume un cambio en el régimen jubilatorio que tiene en cuenta la reducción de la edad de las jubilaciones, especialmente para trabajos insalubres, tal el caso de la minería. Ello pone en evidencia que no se trata solo de considerar la sustentabilidad económica del régimen jubilatorio en sí mismo, sino de generar las condiciones de solidaridad social del conjunto de la economía nacional para asegurar asignaciones previsionales para la totalidad de la población pasiva. Es también el ejemplo ecuatoriano que en estos días "denunció" los tratados bilaterales de inversión (TBI) que otorgan seguridad jurídica a los inversores internacionales y que fueron negociados

en recientes tiempos de ofensiva neoliberal del régimen del capital. Siendo Argentina el país que más tratados suscribió en los 90', debiera observar con atención el ejemplo de las autoridades del Ecuador e imitar la decisión. Ello podría inducir una actitud regional de demolición de la institucionalidad neoliberal construida en la última década del Siglo XX.

Es el preámbulo necesario para el desarrollo de una nueva institucionalidad, lo que supone un cambio en el modelo de desarrollo, a contramano del libre comercio empujado por los transnacionales y los Estados. Es lo que faltó en la lucha contra el ALCA. La resistencia al libre comercio manifestada en la cumbre popular del 2005 en Mar del Plata, convergente con el accionar de los gobiernos del Mercosur y Venezuela, obturaron la posibilidad de discutir el ALCA. Fue un gran éxito y dejó una asignatura pendiente en la construcción de una nueva institucionalidad regional para el desarrollo soberano.

Ni ALCA, ni otros tratados de libre comercio es lo que necesita la región, ni con EEUU, ni con Europa, sino mecanismos nacionales de transformación de los modelos de desarrollo, con otros beneficiarios de la política económica y una articulación regional que suponga una integración para fortalecer la soberanía alimentaria, energética y financiera.

4.- Cambios en el escenario político. La muerte de Néstor Kirchner. La política económica.

El escenario político argentino se modificó tras la muerte de Néstor Kirchner el pasado 27 de octubre, impulsando un debate ya abierto sobre la resolución de la crisis política existente en el país. En los días previos, el repudio masivo por el asesinato del joven militante del Partido Obrero Mariano Ferreyra, el 20 de octubre, a mano de la patota de la Unión Ferroviaria y la complicidad policial, cuando estaba apoyando a trabajadores tercerizados del Ferrocarril Roca, se inscribía también en el debate desde los sectores populares, (aclaremos que la tercerización funciona particularmente en las empresas "privatizadas", es una manera de aumentar los costos y así recibir subsidios del Estado y desde el punto de vista de los trabajadores, les causa perjuicios tanto respecto a las condiciones de inestabilidad como a los salarios percibidos ²).

Por otra parte el Secretario General de la CGT (central de trabajadores burocratizada y oficialista), Hugo Moyano, también pocos días antes de la muerte del ex presidente había convocado a un acto, que fue multitudinario, tratando de demostrar con su poder convocatorio el poder de la burocracia sindical, reclamando más espacios de participación para el sindicalismo en términos políticos y económicos (participación en las ganancias). El asesinato del joven militante Ferreyra volvió a poner en la superficie la discusión de la relación entre la burocracia sindical, las "barras bravas de los clubes de futbol (que intervienen abiertamente en las provocaciones y violencia contra los movimientos populares), su ligazón con el estado y las empresas creadas ad hoc de y por las privatizadas, en las cuales los jerarcas sindicales se convirtieron en empresarios que contratan trabajadores precarizados y mercerizados que coexisten con quienes tienen sus empleos en "blanco".

Estos hechos que ponían en evidencia más las continuidades que las rupturas con el modelo neoliberal desarrollado en los '90, fueron a su vez eclipsados por la repentina muerte de Néstor Kirchner.

A partir del registro de la masiva concurrencia al sepelio tanto de ciudadanos individualmente como de aquellos encuadrados políticamente en el apoyo a los gobiernos de Néstor y Cristina Fernández, se comenzaron a tejer los hilos de una nueva mitología popular, todo lo cual expresa el complejo escenario político y el repunte de la candidatura de la presidenta para las elecciones del 2011, en las encuestas realizadas.

El problema de la crisis política se sustancia en la confrontación entre las clases dominantes y entre éstas y los sectores populares, siendo el dato relevante la profunda desarticulación del movimiento popular, confirmando un cuadro de aguda crisis de alternativa política.

El kirchnerismo en el gobierno disputa hegemonía, en doble sentido. Por un lado pretende ser el administrador del capitalismo realmente existente en la Argentina y por el otro se propone como

1. En el caso de los ferrocarriles vemos una modalidad que funciona en las empresas "privatizadas" agravada por la presencia de dirigencias sindicales que también son dirigencias empresarias. Cuatro empresas proveedoras de UGOFE, la firma que gestiona el ferrocarril Roca, estarían vinculadas a dirigentes sindicales de la Unión Ferroviaria. De esa manera, no solo obtendrían ganancias por las mismas sino que estarían beneficiándose por una sobredeclaración de los verdaderos costos del servicio ya que los costos de "tercerizar" tienden a incrementar los costos totales de la empresa, supuestamente, más que si el servicio lo prestaran directamente. La tercerización en la actualidad alcanza casi un 20% del personal –unos 1.500 trabajadores- que se encuentran encuadrados en convenios diversos y menos favorables que el de los ferroviarios como los de UOCRA, comercio y seguridad privada.

expresión política de los sectores populares, pero dentro del propio sistema. Antes de morir, Néstor Kirchner sugería que el objetivo de la próxima etapa era retomar el propósito de una distribución funcional del ingreso por mitades entre el capital y el trabajo, situación que opera en el imaginario popular recordando el primer peronismo entre 1946 y 1952, momento de la mejor distribución del ingreso leído desde los trabajadores.

La invocación de la representación del conjunto social ha sido el objetivo del discurso de las administraciones kirchneristas en la búsqueda de consenso. Desde el kirchnerismo se desarrolló una fuerte iniciativa para capturar voluntades individuales y colectivas a su proyecto de normalización capitalista enunciado en la asunción del cargo presidencial en mayo del 2003.

La argumentación utilizada, sostenía lo ya señalado por el propio presidente: que a la izquierda del mismo solo había un muro y que el kirchnerismo, nueva identidad emergente, era el límite de la acumulación de poder popular.

Hubo dos importantes acontecimientos que exacerbaron la discusión sobre el tema. Una fue el conflicto a propósito de la resolución 125 y la otra fue la lectura de las elecciones de medio turno en junio del 2009.

En la primera se consolidó una ruptura con una parte del bloque en el poder, que hasta entonces lo acompañaba como principales beneficiarios de la política de dólar competitivo para las exportaciones. En la segunda, el impacto se sintió a través del descontento electoral en las principales ciudades del país, y especialmente en las provincias de Buenos Aires (donde encabezaba el propio Kirchner la lista de Diputados nacionales) y en Santa Cruz (distrito con pocos electores, pero expresión del origen del ascenso político del ex presidente).

La respuesta del proyecto en el gobierno, igual que en la primera etapa (2003-2005), fue avanzar en la disputa del consenso asumiendo parte del programa popular (que venía de la movilización del 2001).

Debe completarse la lectura de la "identidad del kirchnerismo", que se construyó desde el propósito original de "reconstruir el capitalismo nacional", señalando que se acudió a la constitución de un sujeto social y político afín, transitando por la transversalidad, la concertación y un eje central en el PJ, su estructura en el gobierno y en la CGT hegemónica por el sindicato de camioneros. El capitalismo de los 70' devolvía una hegemonía sindical asentada en la producción, en la metalurgia, ahora y desde los '90, está basada en los servicios, el transporte y los camioneros (distribuidores de los productos y mercancías empresarias, a lo largo del país).

Cada apuesta (transversalidad, concertación y pejetismo, cegetismo) se realizó fundamentalmente, en simultáneo, lo que facilitó el acercamiento de sectores de izquierda y partes del movimiento popular (sindical, derechos humanos, religioso, intelectual). El kirchnerismo incluyó así, a parte impresentable de la burocracia política y sindical, junto a una tradición "progresista" de la política nacional.

Un interrogante sigue siendo la preeminencia de uno o de otro de los sectores políticos que se agrupan en el kirchnerismo, claro que con los límites que impone el régimen del capital. Es que el problema a resolver continúa siendo la crisis de alternativa política "real", la que no puede ni identificarse ni resolverse con la disputa al interior del bloque en el gobierno que está basada en una estrategia de pacto social entre el gobierno, los empresarios y el sindicalismo en la CGT (en el transcurso del sepelio de Néstor Kirchner, se impulsó una reunión para buscar acuerdos entre la cúpula de la CGT y la de la UIA (Unión Industrial Argentina) entre los cuales se postergó la discusión del proyecto de la participación de los trabajadores en las ganancias, para hacer "normal" el funcionamiento del sistema, alejando la conflictividad).

El capitalismo local, trasfondo sobre el que actúa la política, profundiza su núcleo en la acumulación de carácter primario exportador, con soja (fundamentalmente transgénica), minería (incluida la con-

taminante y a cielo abierto) y recursos naturales, junto a una industria subordinada, y una estrategia transnacional, con creciente peso del capital externo. Ese es el camino que se confirma con la participación del gobierno en el G20, principal ámbito colectivo del poder mundial para resolver dentro del capitalismo la crisis de la economía mundial.

El capitalismo local condiciona los acuerdos regionales en el límite de la UNASUR, el que ha demostrado aptitud para parar la división territorial boliviana provocada por los sectores más concentrados del poder económico, pero no para rechazar las bases militares estadounidenses en Colombia. El ámbito de integración global sigue siendo el Mercosur y la reapertura de negociaciones de libre comercio con Europa, gestión liderada con la presidencia regional de Cristina Fernández, demorando y/o postergando iniciativas como el Banco del Sur, la nueva arquitectura financiera regional, la investigación de la deuda (nuevamente postergada con el anuncio de negociaciones para cancelar deuda con el Club de París), el retiro del CIADI y mucho menos una decidida articulación con los países del ALBA que enuncian el rumbo socialista.

La apuesta oficial para avanzar en el consenso social y político con el gobierno se facilita con los datos macroeconómicos de recuperación para el presente año, con una proyección de crecimiento cercano al 9%, contra el escaso 0,9% del 2009 y proyectando un arrastre para el 2011 que puede oscilar entre el 6 y el 7%, todo lo cual incide en la generalización de un clima de que la "economía funciona" y que sólo se trata de "una cuestión de tiempo" para resolver los acuciantes problemas sociales que subsisten. Por ahora, se apela fundamentalmente a políticas compensatorias, aplicadas en casi todos los países de la región (inclusive en Colombia), para sólo paliar situaciones de las llamadas "necesidades básicas insatisfechas" y controlar el conflicto social.

Lo que se enuncia en relación con las proyecciones económicas, por parte de las autoridades gubernamentales se contrapone con el anuncio realizado a mediados de noviembre por la Presidenta Cristina Fernández de que el país retomó las negociaciones para cancelar la deuda en cesación de pagos con el Club de París. Se trata de un stock de 6.600 millones de dólares, que adicionando intereses puede llegar a 7.500 millones de la moneda estadounidense. Los integrantes del Club son los países capitalistas desarrollados, socios de la Argentina en el G20 y principales accionistas del FMI.

Poco sabemos a esta altura sobre las condiciones de regularización de esa deuda. Se discute el monto de la deuda y el plazo de la cancelación, dos temas de difícil acuerdo, puesto que es conocida la necesidad de los países acreedores por hacerse de dinero ante una grave crisis fiscal y de endeudamiento, principalmente en el capitalismo desarrollado, principales integrantes de ese club de acreedores.

Lo que podemos reiterar es algo que hemos sostenido en ocasiones anteriores y que remite nuevamente a la pérdida de otra oportunidad para investigar la deuda pública. Afirmamos lo dicho, por ser la deuda con el Club de París la que resulta pasible de una detallada "auditoría", puesto que se trata de préstamos otorgados por países, entre los que se destacan aquellos originados en tiempos de la dictadura y por lo tanto, pueden ser calificados de "deuda odiosa", la misma calificación que otorgó EEUU a la deuda pública de Irak al momento de la invasión en 2003. Para Washington, la deuda asumida bajo la gestión de Sadam Hussein era una deuda ilegítima, por lo tanto odiosa, y así la declaró para desconocerla.

La deuda asumida por la dictadura genocida puede ser considerada "odiosa" y si no se lo hace, una vez más se aleja la posibilidad de investigar y denunciar ese tipo de endeudamiento. En el mismo sentido, aunque ya bajo gobiernos constitucionales, parte de la deuda con el Club de París, incluye préstamos otorgados a la administración De la Rúa en tiempos del blindaje financiero, cuando a fines del 2000 se colocó a disposición del gobierno argentino una considerable suma que contribuyó a facilitar la fuga de capitales, que solo durante el 2001 se manifestó en la pérdida de unos 20.000 millones de argendólares de los depósitos bancarios y una disminución de unos 12.000 millones de dólares de las reservas internacionales.

En la información presidencial se destaca que el Club de París admitió por escrito que se soslayará el papel del FMI en el monitoreo previo de las cuentas nacionales, y que el arreglo producto de negociaciones se hará con el seguimiento de la contabilidad nacional por parte del G20 en forma directa, sin la intermediación del Fondo. Esto que es difundido como un logro de las autoridades debe mediatizarse, por un lado, a la luz de que el G20 está integrado por los principales responsables de la administración del Fondo y que a su vez, la más importante medida asumida por el cónclave de los 20 jefes de Estado ha sido fortalecer el papel del organismo internacional, que se muestra en plena actividad de promotor del ajuste en Europa.

Sin embargo, se trataba de un antecedente que no cayó bien en la burocracia del FMI, interesado en retomar su lugar de auditor implacable para el ajuste en la Argentina.

Por eso, las novedades vinieron por la renovación de las relaciones con el Fondo Monetario Internacional, aunque encubiertas con otro objetivo. En efecto, a motivación es el INDEC (el organismo de elaboración de estadística, cuestionado por su manipulación de cifras que no coincide con los datos de la realidad), o quizá, el abordaje sobre uno de los principales problemas económicos de nuestro tiempo en el país: la inflación.

Lo concreto es la solicitud, formulada por el gobierno, de contribución profesional del Fondo en la elaboración de un índice de precios, en el mismo momento que se difunde la crítica evaluación universitaria a la información estadística oficial: una opinión ofrecida por la academia argentina sobre la consulta realizada por el Ministerio de Economía.

Vale preguntarse por qué no se derivó en técnicos y profesionales locales, con aval en prestigiosas universidades públicas, la tarea que se le confía ahora al FMI. La respuesta puede encontrarse en la tríada articulada entre el canje de la deuda, las negociaciones con el Club de París y la reinsertión del Fondo en el país.

En la estrategia gubernamental se reconoce la necesidad de asociar la normalización de relaciones con el FMI a las asignaturas pendientes que suponen la deuda y la inflación. Bien puede sostenerse que la esencia del problema se explica producto de una política coherente con la participación argentina en el G20 y que demanda resolver el default y normalizar el vínculo local con el mercado financiero mundial, donde el organismo internacional cumple un papel destacado, especialmente asignado para atender la crisis por parte de los presidentes del G20.

Entre el canje, el club de París y el arreglo con el FMI se va cerrando el círculo de la política gubernamental en torno de la deuda externa pública y la finalización de la cesación de pagos declarada a fines del 2001. El objetivo se dirige a reinsertar al país en el mercado internacional de préstamos.

A lo que apuntamos es a señalar que si existe una deuda pasible de ser investigada, esa es la que se mantiene en cesación de pagos con el Club de París, lo que no quita una profunda investigación del conjunto de la deuda.

Sin embargo, todo indica que la presión acreedora apunta a cobrar unos 7.500 millones de dólares en menos de dos años.

Una posibilidad será acudir a las reservas internacionales, poniendo en evidencia que las reservas están para gastarse y en todo caso lo discutible es el destino. Con recursos equivalentes podría resolverse el financiamiento de 208.333 viviendas populares de 60m² (c/u a 600 dólares el m² de construcción a precio de mercado, aunque se pueden realizar aun en forma más económica, saliendo justamente del precio de mercado), que no necesariamente debieran subsidiarse en su totalidad, generando un fondo crediticio inicial para abordar seriamente el déficit habitacional (que hoy se expresa como conflicto, en acciones de tomas de tierras y ocupación de inmuebles).

Debe adicionarse que el Ministro de Economía estrenó por estas horas la propuesta de precandidato a Jefe porteño, nada menos que avalado por la CGT, uno de los socios políticos sociales del modelo de disputa del consenso por parte del gobierno. Un tema que hace mucho ruido dentro del propio

oficialismo y que expresa la disputa política al interior del gobierno, tal como se manifiesta también en los enroques derivados de la creación del nuevo Ministerio de Seguridad, el descabezamiento de la Policía Federal y la nueva designación en Defensa (luego de los sucesos de la toma del Parque Indoamericano en la Ciudad de Buenos Aires, que ensombreció el fin de año con represión y muerte a los sectores populares).

Son todas medidas que inciden en el plano económico, pues se asocian a nuevas discusiones sobre asignaciones presupuestarias, tanto para seguridad como para defensa, llamando la atención que ante la situación de la ocupación de terrenos no emergiera una política social acorde con la insuficiencia de vivienda y de presupuesto público con ese fin.

El problema es la pobreza y no la inseguridad, aunque así lo indiquen las encuestas de opinión. *Más aún, el real problema de base es la desigualdad.*

La deuda es una hipoteca que pesa sobre el conjunto de la sociedad. Su pago favorece el ingreso de los acreedores y posterga la demanda de los necesitados, por caso, de los empobrecidos que reclaman vivienda, salud, educación, empleo, entre otras cuestiones.

La deuda siempre jugó un papel de redistribución regresiva. Insistamos en el tema de que el gasto en intereses de la deuda supera ampliamente el gasto en educación y salud, además de contemplarse cancelaciones de capital adeudado utilizando fondos de las reservas internacionales.

El proyecto de Presupuesto 2011 establece compromisos de cancelación de los servicios de la Deuda Pública por más de 36.000 millones de pesos, contra unos 13.000 millones de pesos en salud, unos 30.000 millones de pesos en educación y cultura y unos 6.000 millones en Ciencia y técnica. Además autorizaba la utilización de 7.500 millones de dólares de reservas internacionales para cancelaciones de vencimiento de capital de la deuda (sitio en internet del Ministerio de Economía).

La no resolución en tiempo y forma parlamentarios del Presupuesto 2011 y la novedad de nuevos pagos que deberán adicionarse el próximo año a cancelación de deuda pública agudiza la disputa por la asignación presupuestaria. Que el Parlamento no apruebe el presupuesto para el 2011 confirma la disputa política por la institucionalidad y habilita la discusión para construir alternativa política, lo que constituye un gran desafío para el movimiento popular.



5. Sobre algunos aspectos de la política. La disputa de la hegemonía.

En el análisis sobre las políticas del gobierno, tenemos que tener en consideración la existencia durante todo el período que va desde el 2003 hasta la actualidad, de la presión popular y la respuesta desde el poder consistente en políticas que disputaron el consenso de los de abajo. Este accionar político incidió sobre la organicidad del movimiento popular y la izquierda, contribuyendo a un mayor desarrollo de la fragmentación y división. La fragmentación del movimiento popular fue tensionada por el accionar gubernamental afectando al movimiento de derechos humanos, al sindical, especialmente a la CTA, e incluso a partidos políticos de la diversa tradición de la izquierda.

Cuando nos referimos a las presiones desde las clases dominantes y desde las subalternas estamos aludiendo a que la iniciativa política del gobierno apunta a la disputa de la hegemonía a dos niveles, con las clases dominantes y con las subalternas para lograr la hegemonía de la administración del capitalismo local.

En primer lugar se trata de disputar la organización del movimiento obrero, especialmente de la CTA. Al respecto, resulta relevante, el proceso iniciado con las elecciones del 23 de septiembre y sus complementarias del 9 de diciembre en el cual la disputa principal se estableció entre dos de las cinco listas presentadas: la 1, que resultó triunfante, es la que sostiene la autonomía respecto de gobierno y partidos encabezada por Pablo Micheli, de la Asociación de Trabajadores del Estado, como Secretario General, José Rigane de trabajadores de la energía eléctrica como Secretario adjunto y con Carlos Chile del Movimiento Territorial de Liberación en el ámbito de la Ciudad de Buenos Aires, entre otros; y la lista 10, de preponderante alineación con respecto al gobierno actual, encabezada por Hugo Yasky, representante de CTERA (docentes), que fue Secretario General hasta las elecciones. La lista 10 no acepta el triunfo de Micheli, a pesar de que fuera ratificado en las complementarias del 9 de diciembre, resueltas por el voto mayoritario de la dirección de la Central saliente (cuando se votó en regionales que habían sido impugnadas por Yasky y en las cuales volvió a perder), y rechazada una presentación judicial de la lista 10. Finalmente se realizó la asunción ante las puertas del Ministerio de Trabajo el 14 de diciembre del 2010 y la instalación orgánica en el edificio de la CTA a principios del mes de enero de 2011 (rechazada también por Yasky).

Pero la disputa no es meramente electoral, se define en acciones concretas que tiendan a la participación masiva de los trabajadores en tanto tales, o en la congelación inmovilizante de las mismas. Por eso es importante hechos y convocatorias que fueron iniciativa de las autoridades nuevas de la CTA, como la de convocar a un paro nacional en repudio a la muerte de Mariano Ferreira (joven asesinado en la lucha de los trabajadores ferroviarios tercerizados); o acompañando a los jubilados en su reclamo por la histórica reivindicación por el 82% y a los pueblos originarios en sus reclamos históricos y contra la represión (que tuvo lugar en la Provincia de Formosa), o con aquellos que luchan por la vivienda y contra la represión de las policías, sea la Federal o la de la Ciudad de Buenos Aires (creada por Macri), que poco antes del fin de año 2010 se realizaron en el Parque Indoamericano, ubicado en el barrio popular de Villa Soldati. Este tipo de iniciativas y acciones son las que deben mantenerse y sostenerse en la disputa por el despliegue masivo de la central en los principios fundacionales, lo que requiere de consenso mayoritarios a discutir en forma asamblearia, sea un gran congreso de la CTA, o formas de protagonismo en la definición de cursos de acción colectiva para la lucha y la organización de una Central que vaya por la duplicación de sus miembros en el mediano plazo.

Pero, aunque fundamental, tampoco alcanza con construir alternativa sólo entre los trabajadores y por eso se agiganta la propuesta de construir poder popular extendido al conjunto de la sociedad particularmente desde la constituyente social. Es un problema a resolver en la constitución de un sujeto popular plural, que pone en discusión el carácter plurinacional de la sociedad argentina y una clave de la disputa por la emancipación social.

6. Inflación y pobreza.

No solo se trata de déficit de viviendas, sino de encarecimiento de la vivienda en general, tanto de aquella que remite a la vivienda popular, única de familia, como a la que constituye la base del negocio inmobiliario de los últimos años, que ante la crisis se constituyó en fuente de resguardo de valor.

Los precios de los alquileres aumentan y afectan principalmente a los sectores de menores ingresos, aquellos que no tienen vivienda. Crece el precio del m², especialmente en las principales ciudades del país, territorios del boom de la construcción. Los precios de la construcción crecen también por inducción especulativa, de reorientación de ahorros ante el temor de la desvalorización derivada del flagelo de la inflación.

Apuntamos seriamente al tema de la vivienda, puesto que más allá de medidas administrativas en el seno del gobierno y a políticas de "orden", lo que se requiere son medidas de emergencia, para el caso, habitacional, las que se asocian a otras muchas demandadas por la situación de indigencia y pobreza de una importante franja de la sociedad, más allá de lo señalado por el Indec.

Un INDEC que acaba de anticipar los primeros datos censales, aunque aún falte una batería de indicadores que nos permita sacar conclusiones sobre cambios relativos al orden económico.

Por lo pronto sabemos que somos más de 40 millones, más mujeres que hombres salvo en tres provincias patagónicas, Tierra del Fuego, Santa Cruz y Chubut, y que la Ciudad de Buenos Aires, la de menor crecimiento poblacional, que pese a su escaso crecimiento, sigue siendo expulsora de población, por ser costosa la vida en la ciudad capital, y especialmente por ser un centro de concentración de inversión inmobiliaria, donde junto a la opulencia creció en su territorio la marginalidad de villas de emergencia, habitadas con población desplazada del resto del país.

Es que el crecimiento económico de los últimos años también atrae a los principales centros urbanos a la población empobrecida del conjunto del país.

El tema de la pobreza merece ser analizado a fondo, pues otro de los temas estructurales que reapareció en estos días es el de la inflación, con el aumento de los combustibles, pese a disposiciones en contrario de la secretaría de comercio, que restringe los incrementos desde mediados de año.

La inflación de precios es una realidad y ahora, a la suba de los alimentos deben adicionarse la de las naftas, que como sabemos se trasladan rápidamente, vía transporte y costos de producción a los precios del conjunto de la economía.

El incremento de los precios lo pagan los más pobres. Es un fenómeno económico de transferencia de recursos de aquellos que no tienen condiciones para imponer precios. Es al mismo tiempo una forma de resguardo de la apropiación de tasa de ganancia cuando esta se ve afectada por otras razones, la crisis por ejemplo.

La inflación por su parte tiene historia en el país, tanto como las políticas antiinflacionarias, con efectos de ajuste para las condiciones de vida de los sectores más desprotegidos.



7. Algunas conclusiones.

La cercanía de un proceso electoral de renovación presidencial desafía la construcción de poder popular más allá de cómo se resuelva la participación electoral de los colectivos que actúan en la recomposición de la CTA y el armado de la constituyente social.

El problema de la construcción de alternativa política se resuelve más allá de cualquier armado electoral y por cierto, más allá de cualquier propuesta de recreación del capitalismo.

La construcción de alternativa política es el asunto principal de la discusión del movimiento obrero y popular a escala global, especialmente en la región latinoamericana.

Lo que pretendemos discutir es que se trata de dos disputas por la hegemonía. La que ocurre entre las clases dominantes para gestionar el capitalismo y la que discute el tipo de sociedad, capitalista o socialista.

Además, estamos apuntando a pensar en que desde el gobierno del capitalismo argentino la disputa hegemónica es a dos puntas, con los de arriba (clases dominantes) por el gobierno del capitalismo local. Con los de abajo (clases subalternas) por el consenso a la política de gestión del capitalismo en tiempo de crisis global.

Nuestro desafío pasa por la construcción de alternativa política popular para hacer realidad la perspectiva emancipadora en la Argentina.

Buenos Aires, diciembre de 2010.



Av. Corrientes 1515, 6º B, C. A. de Buenos Aires, Argentina
fisyp@fisyp.org.ar
www.fisyp.org.ar